

Albert Beltran

ESCANDALO INTERNACIONAL

SE PIDE A LAS NACIONES UNIDAS QUE INTERVENGA EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICO-AMERICANOS.

En los Estados Unidos pocos problemas se han resistido a ser resueltos como la extraordinaria explotación de cinco millones de trabajadores industriales y agrícolas México-Americanos. A través de los años, el Comité Tolan de la Cámara de Representantes, el Comité La Follette del Senado y en 1951 una Comisión Presidencial y numerosas Agencias Privadas han estudiados los problemas de los México-Americanos

Pero los estudios aislados, no han cambiado las condiciones y la actual Administración tiende a ignorar la injusticia que se ha hecho mayor que las que se revelaron antes. Por esta razón el Comité Americano de Protección a los Nacidos en el Extranjero, en una petición presentada en Abril 17, ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas que investigue las "serias privaciones de los derechos humanos de los mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos".

TRATADO VIOLADO:

Cuando acabó la guerra Mexico-Americana en Febrero 2 de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió a los Estados Unidos los vastos territorios que hoy constituyen los Estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. El Tratado aseguraba que los 75 mil mexicanos que en la época de la firma del mismo habitaban el territorio, tendría garantías en sus propiedades y derechos civiles, siendo despreciado este compromiso por los Estados Unidos que han asumido una actitud de superioridad racial hacia los México-Americanos desde entonces.

El trabajo en las minas, en las fábricas y en el campo del Suroeste es la principal fuente de empleo de los México-Americanos.

Entre ellos, ninguno es tratado mejor que los cientos de miles de trabajadores agrícolas que se traen a través de la frontera cada año para

levantar las cosechas de algodón, cerezas, remolachas y otras. Ellos ejecutan los trabajos de espalda doblada que muy pocos trabajadores aceptan; muchos vienen de regiones vecinas de México y ACPFB los describe "entre los campesinos más pobres del Hemisferio Occidental".

TRAMPAS Y VIOLENCIA:

En los Estados Unidos, estos trabajadores (braceros) forman el más bajo fondo del miserable ejército de trabajadores manuales —nativos o nacidos en el extranjero— que han sido permanentemente incorporados a la agricultura americana. Cuando han intentado la más ligera mejoría de sus condiciones, sus esfuerzos se han frustrado por subretfugios y violencia de los grandes cosecheros. Y los cosecheros disfrutaban de una colusión con los Gobiernos Municipales, del Condado, del Estado y hasta en los niveles federales. La primera huelga de trabajadores agrícolas en el valle imperial de California en 1928, se rompió por arrestos al por mayor y deportaciones de todo el que estuviera conectado con el Sindicato. Cuando el Comité Lafollette investigó la huelga en 1933 de 7 mil trabajadores México-Americanos, el Cherriffe del Condado Kern de California declaró: "protegemos a nuestros agricultores del Condado de Kern. Son gente de la mejor. Mantienen el Condado a producción. Pero los mexicanos son pordioseros, no tienen standard de vida. Los tratamos como una piara de cerdos"

Muchos de los trabajadores mexicanos están sometidos a un peonaje virtual. En marzo 15, 1948, Raúl González, empleado en la Compañía Stokeley Van Camp Co. recibió en pago un cheque de Dls. 18.84 para cubrir 48 horas de trabajo, pero la compañía le dedujo Dls. 17.50 por hospedaje y Dls. 2.00 por gastos de médico. Por su trabajo, González debía a sus patronos Dlls. 0.66.

PRISIONEROS DE GUERRA.

Las protestas que se hacen contra tales condiciones, dan como resultado la prisión y deportación a México.

Un periódico católico "Jubilee", hacía notar en su número de Abril de 1958 que "de este lado de la frontera, el estado de los braceros se parecía a los de los prisioneros de guerra".

Porque están privados de los seguros contra el desempleo, de las garantías del salario mínimo y de otras protecciones que cubren a los trabajadores americanos y los inmigrantes mexicanos se usan para bajar los salarios en los campos.

Entre el 10. y 5 de Agosto de 1958, los productores de durazno en el Condado Sutter de California, recibían un pago de 15 y 18 centavos por caja recolectada. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos certificó que había escasez de mano de obra y aprobó la importación de 933 mexicanos para trabajar en los campos. El 7 de Agosto llegaron 700 mexicanos, pero un día antes el "Servicio de Empleo en Ranchos de California" fijó una base de salario de 12 centavos para el área. En el Valle de San Joaquín en California, por un período de 10 años, los pizcadores de tomate sufrieron rebajas de 40% en sus salarios, a medida que los mexicanos empleados pasaban a ser el 90% de los pizcadores.

SIN AYUDA.

Desde 1942, cuando los Estados Unidos y México firmaron el primer Tratado Internacional para regir el trato de los ciudadanos mexicanos en los campos agrícolas de los Estados Unidos, el Gobierno Mexicano ha protestado en vano contra las violaciones del Tratado. Aún en la amenaza de cerrar la frontera a importaciones futuras de braceros, no ha hecho efecto en Washington. Los cosecheros saben que si es necesario, pueden sobrepasar sus cuotas de braceros a través del tráfico ilegal en la frontera.

En 1958, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, fijó un salario de Dls.0.50 por hora como un pago aceptable para el nivel de los nacionales mexicanos, pero en todo el Suroeste los mexicanos son contratados a salarios menores. El Gobierno de México ha establecido una oficina -

especial en la ciudad de México para manejar las reclamaciones de los mexicanos expulsados de los Estados Unidos sin que se les haya dado la oportunidad de cobrar los salarios que se les deben. A esta oficina se han reportado solamente una minoría de los casos. Sin embargo, las reclamaciones por salarios no pagados que ha presentado el Gobierno de México, llegan bien a Dls. 620,000 anuales.

DESGRACIA NACIONAL.

Es en favor de estos braceros y de otros inmigrantes mexicanos y de los ciudadanos México-Americanos en los Estados Unidos, que el Comité Americano para Protección de los Nacidos en el Exterior ha preparado su petición a las Naciones Unidas.

Tres Estados — New York, Pennssylvania y New Jersey— han pasado alguna legislación para su protección, pero se ejecuta muy debilmente. Comités Oficiales de Inmigración existen en 20 Estados, pero su función es solamente de dar consejos. La AFL - CIO, han hecho recientemente movimientos para organizar mejor a los trabajadores agrícolas, pero éstos son un ritual sin sentido en el caso de los trabajadores por décadas. Permanece en pie que el trato de los braceros es una desgracia nacional y un escándalo internacional.

México, D.F., a 4 de Mayo de 1959.

'INTERNATIONAL SCANDAL'

UN is asked to act on human rights for Mexican-Americans

FEW PROBLEMS in the U.S. have resisted solution so stubbornly as the extraordinary exploitation of 5,000,000 Mexican-American industrial workers and farm laborers. Over the years the Tolan Committee of the House of Representatives, the LaFollette Committee of the Senate, a 1951 Presidential Commission and numerous private agencies have studied the plight of the Mexican-Americans.

But studies alone don't change conditions and the present Administration tends to ignore the injustices which have worsened since its predecessors revealed them. For this reason the American Committee for Protection of Foreign Born, in a petition presented April 17, has asked the Human Rights Commission of the UN Social and Economic Council to investigate the "serious deprivations of the human rights of the Mexican immigrant in the United States."

TREATY VIOLATED: When the Mexican-American war ended on Feb. 2, 1848, with the Treaty of Guadalupe Hidalgo, Mexico ceded to the U.S. the vast territory which was to become California, Arizona, New Mexico and Texas. Treaty assurances that the 75,000 Mexicans in the territory at the time of signing would be secure in their property and civil rights were disregarded and the U.S. attitude of racial superiority has plagued Mexican-Americans ever since.

Work in the mines and huge factory-farms of the Southwest provide the chief employment for Mexican-Americans.

Among them none are more shabbily treated than the hundreds of thousands of agricultural workers who are brought

tom of the heap among a miserable army of itinerant farm hands—native and foreign-born—who have become a permanent fixture in American agriculture. Whenever they have attempted even the slightest improvement of their conditions their efforts have been frustrated by subterfuge and violence by the big growers. And the growers enjoy the collusion of government on the municipal, county, state and Federal levels.

The first strike of agricultural workers in the Imperial Valley in California, in 1928, was broken by wholesale arrests and deportations of everyone connected with the union. When the LaFollette Committee investigated a 1933 strike of 7,000 Mexican-American workers the Deputy Sheriff of Kern County, Calif., testified: "We protect our farmers here in Kern County. They are the best people. They keep the county growing. But the Mexicans are trash, they have no standard of living. We herd them like pigs."

Many of the Mexican workers are held in virtual peonage. On March 15, 1948, Raul Gonzalez, employed by the Stokeley-Van Camp Co., was due a pay check of \$18.84 to cover 48 hours of work. But the company had deducted \$17.50 for board and an additional \$2 for medical expenses. For his labor, Gonzalez "owed" his bosses 66c.

'PRISONERS OF WAR': Protests against such conditions usually result in prompt arrest and deportation to Mexico. A Catholic magazine, *Jubilee*, noted in its April, 1958, issue that "on this side of the border the status of the braceros resembles that of prisoners of war."

Because they are deprived of unemployment insurance benefits, minimum wage guarantees and other protections which cover American workers, the Mexican immigrants are used to depress wages in the fields.

Between Aug. 1 and 5, 1958, peach growers in Sutter County, Calif., were paying 15c to 18c a box for pickers. The U.S. Dept. of Labor certified a labor shortage and approved the importation of 933 Mexican nationals to work in the fields. On Aug. 7 some 700 Mexicans arrived but a day earlier the California Farm Placement Service certified a 12c base wage for the area.

In California's San Joaquin Valley over a ten-year period tomato pickers' wages have dropped 40% while the proportion of Mexican nationals has risen to 90% of all pickers.

NO RELIEF: Since 1942, when the U.S. and Mexico signed the first international agreement governing the treatment of Mexican nationals in U.S. agricultural fields, the Mexican government has vainly protested violations of the agreement. Even threats to close the border to further importation of braceros have had no effect in Washington. The growers know that, if necessary, they can overfulfill their "quota" of braceros through the continuing illegal border traffic.

In 1958 the U.S. Dept. of Labor set a 50c hourly wage as an acceptable pay level for Mexican nationals. But all over the Southwest, Mexican contract labor is cheated out of even these low wages. The Mexican government has set up a special office in Mexico City to handle claims of Mexicans summarily ejected from the U.S. without being given a chance to collect wages due them. Only a small minority of such cases are reported, but wage payments reclaimed by the Mexican government run well over \$620,000 annually.

NATIONAL DISGRACE: It is on behalf of the braceros, other Mexican immigrants and Mexican-American citizens in the U.S. that the American Committee for Protection of Foreign Born has prepared its petition to the UN. Short of the intervention requested, the immediate fu-



FARM WORKERS PICKET AN EL CENTRO, CALIF., EMPLOYMENT OFFICE
A sheriff said: "Mexicans are trash... We herd them like pigs."

ture of foreign-born and native agricultural workers in the U.S. appears bleak.

Three states—New York, Pennsylvania and New Jersey—have passed some legislation for their protection, but enforcement is weak. Official migrant labor committees now exist in 26 states but their function is largely advisory. The

AFL-CIO has recently made motions as if to back a major organizing drive among agricultural workers but this has been an empty ritual in the house of labor for decades.

It still remains that treatment of the braceros is both a national disgrace and an international scandal.

THE ORDEAL OF JUNIUS SCALES

Smith Act test 'membership' case before Supreme Court second time

HOW FAR the Smith Act can still be used against a political minority will be the key issue when the Supreme Court for a second time hears arguments on April 27 in the case of Junius Scales, former North Carolina Communist Party chairman.

The hearing brings to a climax a proceeding that began more than four years ago with Scales' arrest under the section of the law forbidding what has been called "knowing membership" in any organization which advocates forcible overthrow of the government. Scales was convicted and sentenced to six years at a first trial in Greensboro, N.C., in 1955.

The Fourth Circuit Court of Appeals upheld the conviction, but the Supreme Court set it aside in October, 1957, in a ruling that avoided the question of the constitutionality of the law. Scales was granted a new trial because he had been denied access to FBI records of government informers who testified against him in court.

At a second trial in February, 1958, Scales was convicted again on an amended complaint which deleted some of the unsupported charges of the first trial. He was again sentenced to six years and again appealed.

TEST CASE: Scales is no longer a CP member, but his case is regarded by government and defense alike as the main test case involving the Smith Act membership section. Other membership cases awaiting the outcome of the Scales case are those of Claude Lightfoot, Chicago; John Noto, Buffalo; Max Weiss, Chicago; John Hellman, Butte, Mont. and Dr. Albert Blumberg of New York who was indicted in Philadelphia. Last year a Federal Court, on government motion, dismissed a membership case against Emanuel Blum of Indiana.

In addition to these defendants, the 11 CP leaders who were convicted in the first Smith Act "conspiracy" trial in

1951 have been indicted under the membership clause, but no steps have been taken to bring them to trial.

Conducting Scales' defense is one of the nation's leading civil liberties attorneys, Telford Taylor, brigadier general and chief Allied prosecutor of Nazi war criminals at the Nuremberg trials. Scales, now living in New York, earns \$65 a week as an unskilled worker.

Legal costs—moderate counsel fees and the considerable expense of printing briefs and other papers—are beyond his reach. Contributions to help carry the case to a successful conclusion will be welcomed by the defendant's wife, Mrs. Gladys Scales, 90 LaSalle St., New York 27, N.Y.



JUNIUS SCALES (L.) WITH COP
It's been a long four years



CHILD LABOR IN THE FIELDS
There are no laws to protect her

across the border each year to harvest cotton, berries, sugarbeet and other crops. They do the back-bending jobs which few other workers would undertake; most of them are from neighboring Mexican provinces and the ACPFB petition describes them as "among the poorest peasants in the Western Hemisphere."

TRICKS AND VIOLENCE: In the U.S. these workers (braceros) are at the bot-